

La desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional. De la salida del personal de inteligencia al desarrollo de las agencias privadas de inteligencia en el Perú

JARIS MUJICA*

Pontificia Universidad Católica del Perú

jmuji@pucp.edu.pe

RESUMEN

Tras la difusión del video Kouri-Montesinos el 14 de septiembre del año 2000, el gobierno de Fujimori entró en crisis. Una de las principales acciones tras aquel evento fue la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional SIN (aún durante el gobierno de Fujimori), y luego la reforma del sistema, durante el gobierno de transición de Paniagua en el año 2001. Por diversas presiones y perspectivas políticas, en ese periodo fueron despedidos, cesados, desactivados o reasignados un gran contingente de analistas, operativos, agentes e informantes: cerca de 2 mil personas terminaron su relación con el Sistema de Inteligencia Nacional. Como parte de una investigación sobre la transformación de la inteligencia peruana, este artículo tiene tres objetivos: a) describir el contexto de la desactivación y la reforma para entender los objetivos y causas del despido y desactivación de este contingente de agentes y analistas; b) determinar el rango numérico de agentes y analistas que fueron despedidos, cesados o desactivados entre la desactivación del año 2000 y la reforma del año 2001; c) determinar el destino y funciones de los agentes y analistas despedidos y desactivados en los años posteriores a 2001, lo que muestra una relación con el desarrollo de empresas de seguridad, sistemas privados de inteligencia, inteligencia empresarial y un mercado de compra-venta de interceptaciones telefónicas durante los últimos catorce años. Este estudio se sostiene en el cruce de tres tipos de datos: fuente abierta provista por la normativa, informantes clave que participaron en el proceso de los años 2000 y 2001, y datos primarios de actores que actualmente son miembros de empresas de seguridad e inteligencia privada.

Palabras clave: inteligencia, inteligencia estratégica, inteligencia empresarial, políticas de seguridad, seguridad privada, interceptaciones telefónicas.

* Candidato a doctor en Ciencia Política, máster en Ciencia Política y licenciado en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Docente del Departamento de Ciencias Sociales, sección Ciencia Política y Gobierno e investigador del Laboratorio de Criminología Social de la PUCP.

The National Intelligence Administration: From the Deactivation of the SIN to the Development of Private Intelligence Agencies in Peru

ABSTRACT

Following the widespread distribution of the Kouri-Montesinos video on September 14th, 2000 the Fujimori Government erupted into crisis. The video set off the deactivation of the National Intelligence Administration (SIN) during Fujimori's reign, and the reform of the political system during Paniagua's transitional government in 2001. As a result of intense political pressure and changing political perspectives, numerous analysts, operatives, agents and informants were fired, deactivated, reassigned, or retired. In total, over 2,000 individuals ended their working relations with the SIN. This article is part of a wider investigation on the transformation of the Peruvian Intelligence Administration that seeks to: a) describe the context of deactivation in order to understand the aims and causes of SIN's deactivation; b) determine the numeric range of agents and analyst that were fired, retired or deactivated during the SIN deactivation between 2000 and reform in 2001; c) determine the future and functions of the agents and analyst fired and deactivated post-2001 in order to provide insight into the relationship with the development of security companies, private intelligence systems, entrepreneurial intelligence and a market of telephone interceptions over the course of the last 14 years. This study uses a cross-reference of three kinds of data: normative, key informants that were part of the processes from 2000 to 2001, and primary data from actors that are part of private security and intelligence companies.

Key words: Intelligence, strategic intelligence, entrepreneurial intelligence, security policies, private security, telephonic interceptions.

INTRODUCCIÓN

La importancia de los servicios de inteligencia recae no solamente en su relevancia para la toma de decisiones, sino en su importancia como mecanismo de control de amenazas a la seguridad: se trata de un brazo necesario para los Estados contemporáneos. Y si bien hay un largo y sostenido consenso sobre su necesidad e importancia, en contraste no hay una amplia línea de trabajo e investigación sobre su historia reciente y sus problemas.

El servicio de inteligencia en el Perú ha pasado por una severa crisis durante las últimas dos décadas. Durante los años noventa atravesó una suerte de auge institucional —aumentó en tamaño, presupuesto, personal—, pero ello caminó de la mano con la cooptación de actores del Ejecutivo que utilizaron el Servicio para fines ilegales. Durante la primera década del siglo XXI el desmantelamiento y la crisis institucional fue la característica central: la reducción del presupuesto, la desactivación del servicio, el despido del personal. Aquella situación trajo consigo severas consecuencias que no se han terminado de entender (Obando, 2009; Gómez de la Torre Rotta, 2009; Alegría, 2004).

Este artículo es parte de un estudio, que inició en junio de 2013, sobre la situación de los servicios de información e inteligencia privada en el Perú, y tiene un objetivo: establecer un argumento para entender qué es lo que sucedió y cuál fue el destino del personal de inteligencia desactivado, despedido o cesado tras la caída del gobierno de Fujimori. Para ello se ha recurrido a tres fuentes: entrevistas semiestructuradas a exagentes y analistas del Servicio de Inteligencia Nacional, Dirección Nacional de Inteligencia, Servicio de Inteligencia del Ejército e Inteligencia de la Marina; entrevistas de salida a personal de empresas privadas de seguridad y de tecnología para la seguridad en actividad; datos secundarios de informes sobre la desactivación del Servicio, reportes y normativa sobre la situación del Servicio. Ello ha generado, hasta agosto de 2014, 21 entrevistas semiestructuradas, 24 entrevistas de salida y un archivo de 360 páginas.

Este artículo se divide en tres secciones. La primera muestra el contexto de la desactivación del Servicio y la crisis que ello implicó. La segunda sección se concentra en un ejercicio para determinar un rango numérico de agentes y analistas que salieron del Servicio. La tercera sección muestra de manera general el argumento de la reubicación de los agentes y analistas en los servicios privados de seguridad e información.

1. LA DESACTIVACIÓN Y LA REFORMA DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA NACIONAL

Tres días después de la difusión pública del video (ocurrida el 14 de septiembre de 2000) en el que se mostraba imágenes en las que el asesor presidencial Vladimiro Montesinos¹ entregaba un soborno al congresista de oposición Alberto Kouri para pasarse a la bancada oficialista, el gobierno de Alberto Fujimori decidió llamar a elecciones presidenciales anticipadas². En el discurso de ese mismo día —el 16 de septiembre de 2000— decretó también la *desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)*³.

Y tras la desactivación formal del SIN, trascurrieron solo 58 días antes de la salida de Fujimori del Perú rumbo a la VIII Cumbre de la APEC en Brunei (el 13 de noviembre del año 2000), después de la cual renunció por fax a la Presidencia de la República, el 20 de noviembre (el 21 de noviembre el Congreso rechazó la carta de renuncia y lo destituyó). El 22 de noviembre el presidente del Congreso, Valentín Paniagua (dirigente de Acción Popular), asumió el mandato interino del Gobierno de Transición, que duraría hasta el 28 julio de 2001.

La desactivación del SIN implicó una medida más formal que práctica. En el intento de Fujimori de replantear el sistema de inteligencia, presentó un proyecto de ley al Congreso que daba a luz a la «Central Nacional de Inteligencia (CNI)»⁴, pero este proyecto no se llegó siquiera a discutir con precisión debido a las tensiones de la crisis política y a la huida de Fujimori del país. Así, el 3 de octubre de 2000 se publicó la ley que desactivó el SIN en un plazo de quince días (ley 27351),

¹ El 24 de septiembre del año 2000 Montesinos huyó a Panamá y regresó a Perú el 23 de octubre de ese año, pero sin ubicación conocida. El 25 de octubre la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció a Montesinos «por los delitos de genocidio, tortura, terrorismo, lesiones graves y homicidio calificado». El 2 de noviembre las autoridades suizas informaron de la existencia de varias cuentas bancarias de Montesinos en ese país y le acusaron de «lavado de dinero». Como consecuencia, el gobierno de Fujimori abrió una investigación y designó a José Ugaz como procurador especial para el caso. El 6 de noviembre la justicia peruana ordenó el arresto de Montesinos y el embargo preventivo de sus bienes; y tres días después Fujimori reveló la existencia de otras cuentas bancarias de su exasesor en Gran Caimán, en Montevideo y en Nueva York (Dirección Nacional de Inteligencia, 2013).

² «[...] tras una profunda reflexión y objetiva evaluación de la coyuntura he tomado la decisión; 1° de desactivar el Sistema de Inteligencia Nacional y en 2° lugar de convocar a Elecciones Generales, medida esta última que espero sea acogida y entendida, en su real contexto por los organismos competentes» (Discurso público televisivo de Alberto Fujimori del 16 de septiembre de 2000).

³ Un mes después —el 28 de octubre— Fujimori destituyó a la cúpula del Ejército por temor a represalias de los aliados de Montesinos: al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (el general Villanueva Ruesta), al almirante Américo Ibárcena (comandante general de la Marina), al general Elesvan Bello (comandante general de la Fuerza Aérea) y al jefe de la Segunda Región Militar, general Luis Cubas. Durante las semanas siguientes, Fujimori y un grupo de miembros de seguridad del Estado y del Servicio de Inteligencia iniciaron una mediatizada labor de búsqueda de Montesinos por Lima.

⁴ El concepto era claramente militar. El artículo 1 indicaba que la «Central Nacional de Inteligencia es un organismo del Estado, que en su especial naturaleza, cumple funciones reservadas directamente vinculadas con la Defensa Nacional». El artículo 2 indicaba dependencia directa del presidente de la República.

pero luego, el 30 de octubre de 2000 una nueva ley (ley 27361) amplía el plazo por treinta días más. Finalmente, el 7 de diciembre (ya durante el gobierno de transición), la ley 27374 amplió el plazo hasta el 15 de enero de 2001.

Con una desactivación formal pero que en la práctica no había generado modificaciones estructurales en el diseño institucional, el coronel del Ejército Peruano Luis Rodríguez Silva (hasta entonces jefe del SIN de Montesinos) quedó a cargo del Sistema de Inteligencia del 30 de octubre de 2000 hasta el 26 de febrero de 2001 (por cuatro meses), cuando el gobierno de transición de Paniagua designó como jefe del SIN al general en retiro Juan Campos Luque. Este se mantendría en el puesto solo por cinco meses, pues en junio de 2001 se aprobó la ley 27479 de Sistema de Inteligencia Nacional, que creaba el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI)⁵ como cabeza del sistema y a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica (DINIE) como el organismo operativo. *La etapa de transición estaba llegando a su fin*, el candidato Alejandro Toledo ya había ganado las elecciones presidenciales y asumiría el cargo el 28 de julio de 2001.

Un mes antes de que el nuevo presidente asuma el mando del gobierno, el 27 de junio de 2001, el Gobierno de Transición nombró como presidente del CNI al contralmirante en retiro Alfonso Panizo (y este nombró como jefe de la DINIE al almirante en retiro Luis Zuzunaga, que había sido jefe de la inteligencia naval DIN), lo que inició una segunda etapa en el proceso de desactivación-reforma del Servicio de Inteligencia. Sin embargo, Panizo solo estuvo en el puesto por siete meses. El 22 de enero de 2002, Toledo lo retiró del cargo y nombró como jefe del CNI a Juan Velit (que había sido congresista del Partido Perú Posible), y la jefatura de la DINIE se entregó al general en retiro del Ejército Daniel Mora. Los cambios en la jefatura del CNI y en la DINIE no terminaron ahí: después de Velit llegó Rospigliosi, a este lo sucedió Almeyda, a este Panizo (su segunda vez como jefe), y a este Mora; y a Mora lo sucedió Arbocó, y finalmente tomaría el puesto Raygada. Una sucesión de ocho jefes de inteligencia en la primera mitad de esa década.

⁵ «Se estableció en el artículo 3, que *el Sistema de Inteligencia Nacional tiene como fundamentos la preservación de la soberanía nacional y la defensa del estado de derecho, enmarcado dentro del estricto respeto de los derechos humanos*. El director del CNI es un cargo de confianza, designado por el Presidente. A su vez, depende del presidente del Consejo de ministros y es miembro nato del Consejo de Defensa Nacional. El CNI está compuesto por su director, el director de Inteligencia Estratégica y representantes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y de los Ministerios de Interior, Relaciones Exteriores, Economía y Educación. La Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica (DINIE) es el organismo ejecutor del CNI, pues realiza la búsqueda, procesamiento y diseminación de la información. Se crea una Comisión Ordinaria de Inteligencia del Congreso que tiene como misión fiscalizar el funcionamiento y la ejecución de los recursos presupuestarios del CNI [...]. Se crea una Junta Consultiva de Inteligencia, presidida por el director de la CNI y compuesta por los jefes de inteligencia de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y del Ministerio del Interior» (Maldonado Prieto, 2002).

Tabla 1. Relación de jefes de inteligencia entre 1998 y 2006

Nombrado durante	Jefe de Inteligencia	Desde	Hasta	Tiempo de duración
Gobierno de Fujimori	Humberto Rozas	24 de agosto de 1998	29 de octubre de 2000	2 años y 6 meses
	Luis Rodríguez	30 de octubre de 2000	26 de febrero de 2001 (durante el gobierno de Paniagua)	4 meses
Gobierno de Paniagua	Juan Manuel Campos Luque	28 de febrero de 2001	26 de junio de 2001	4 meses
	Alfonso Panizo	27 de junio de 2001	21 de enero de 2002	7 meses
	Juan Velit	22 de enero de 2002	2 de agosto de 2002 (durante el gobierno de Toledo)	7 meses
Gobierno de Toledo	Fernando Rospigliosi	3 de agosto de 2002	30 de enero de 2003	6 meses
	Cesar Almeyda	31 de enero de 2003	6 de mayo de 2003	3 meses
	Alfonso Panizo	7 de mayo de 2003	17 de septiembre de 2003	5 meses
	Daniel Mora	18 de septiembre de 2003	21 de marzo de 2004	7 meses
	Ricardo Arboccó	22 de marzo del 2004	24 de marzo de 2004	3 días
	Julio Raygada	26 de marzo de 2004	20 de agosto de 2006	2 años y 5 meses

Fuente: Diario Oficial *El Peruano*. Elaboración propia.

Los intentos por organizar los mecanismos para salvar el evidente desorden no lograron su cometido y la crisis se desató. Es claro que entre el año 2000 y el año 2006 hubo un periodo de crisis del sistema de inteligencia y de su servicio operativo, representado, por un lado, por la alta volatilidad de los jefes de inteligencia. Y, por otro lado, por la precariedad de las políticas de inteligencia, que generaron alta inestabilidad en el Sistema. Es recién a partir del año 2006, con la publicación de la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) (ley 28664 y su reglamento dado por el decreto supremo 025-2006-PCM) que el Sistema de Inteligencia cobra la forma que tiene actualmente (en la segunda década del siglo XXI) (Dirección Nacional de Inteligencia, 2013)⁶.

⁶ Complementariamente, el 11 de diciembre de 2012 fue publicado el decreto legislativo 1141 que establece el marco jurídico que regula la finalidad, organización, funciones, que deben observar los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional (Dirección Nacional de Inteligencia, 2013). Así, «[...] la norma de inteligencia vigente en

Una dilerante política de inteligencia aplicada por el gobierno peruano durante los años 2001-2006, cuya expresión más evidente fue la existencia de ocho jefes de inteligencia en un solo periodo gubernamental es la razón de la expiración de la Ley de Inteligencia promulgada el año 2001. El espíritu de la ley peruana vigente (ley 28664) se encuentra claramente en el artículo 4, el cual señala que las actividades de inteligencia se sustentan en los principios de legalidad, legitimidad, control democrático, pertinencia, circulación restringida, especialidad y planificación (Gómez de la Torre Rotta, 2009, p. 124).

Lo que queda claro es que (por lo menos) entre los años 2000 y 2006 hubo un periodo de crisis gravitante en el sistema de inteligencia marcado por i) la evidente debilidad y precariedad de la política de inteligencia y sus directrices, y con ello la debilidad del diseño y de su ingeniería institucional (claramente visible en las varias modificaciones en el diseño organizacional de esos años); ii) la debilidad institucional y de dirección y decisión en el liderazgo del sistema (lo que es evidente en la alta volatilidad de los jefes y los múltiples escándalos mediáticos). Aquella situación marchó de la mano de un fenómeno relevante: entre el año 2000 y 2006 (y después), *hubo una salida importante de un número no determinado de personal del sistema de inteligencia* que fue reasignado, despedido, cesado, no renovado, desactivado o desconectado.

Los sucesores de Montesinos en el área de inteligencia —general (r) Juan Campos y vicealmirante (r) Alfonso Panizo, respectivamente— debieron eliminar todo el personal ligado al exasesor [Montesinos]. La reducción fue drástica, *pues se pasó de 5000 a 400 funcionarios. Entre ellos, se encontraban 800 miembros de la guardia de seguridad personal de Montesinos* (Maldonado Prieto, 2002, p. 9)⁷.

[Periodista de la revista *Caretas* pregunta]: El SIN tenía 2500 empleados. Hoy el CNI tiene 500. ¿Cómo les fue con el presupuesto de nueve millones de soles? [Panizo responde]: Era para terminar el año 2001. Para el 2002, el Ministerio de Economía nos ha asignado alrededor de 40 millones de soles. Lo importante es cómo se maneja. Antes, el presupuesto reservado era de alrededor del 70%. Ahora es de 14% (*Caretas*, 20 de diciembre de 2001).

Entre diciembre de 2000 y enero de 2001 prácticamente todo el personal de la DIN (Dirección de Inteligencia Naval) fue dado de baja por el gobierno de transición de Valentín Paniagua (Diario *Expreso*, 2002).

el Perú [desde 2006] nace a partir de la acumulación [...] de catorce proyectos de ley previos [...] y de tres aportes académicos [...]: 1) Informe de la Misión Harvard, Programa *Justice in Times of Transition* del año 2002: podemos discutir la pertinencia de todos los extremos del Informe, pero fue sin duda una herramienta útil para cualquier proceso legislativo que implique generar normatividad de inteligencia con contrapesos políticos; 2) Informe de la Comisión de Reestructuración del CNI, *Propuesta para la reorganización del Consejo Nacional de Inteligencia* del 19 de julio de 2004; y, finalmente 3) Informe/Documento de Estudio 001-2004/JUS del Ministerio de Justicia del Perú, siendo ministro el doctor Baldo Kresalja» (Gómez de la Torre Rotta, 2009, p. 125).

⁷ Las cursivas son mías.

¿Qué motivó al despido y desactivación del personal de inteligencia? Una hipótesis razonable sugiere que esto se debió en parte a la presión de intereses de actores del gobierno de Fujimori, para evitar que los agentes, operativos y analistas se conviertan en informantes del nuevo Gobierno, colaboradores eficaces, etcétera; sin embargo, esto marcha junto a un extendido discurso de quienes estuvieron cerca de ese proceso, que sugiere que las personas responsables del tema de inteligencia durante el gobierno de transición no eran especialistas en el tema y cedieron paso con facilidad a la «limpieza democrática del servicio». No es posible determinar una causa central, pero sí es claro que ambas ideas aparecen juntas como una hipótesis que marca una división de etapas de estos despidos.

[Pregunta] ¿Quién vigiló la desactivación, a cargo de quién estuvo la desactivación? [Respuesta]: estuvo a cargo de muchos civiles no especializados en la lógica de inteligencia [...] querían cambiar todo, sacar a todos, tabula rasa para crear todo de nuevo, con «democratización» [...] muchos salieron ahí, los que eran leales a la cabeza de la institución salieron (Exmiembro del SIN 19).

No hay algo concreto, pero sí es real que las personas que entraron en el periodo de transición tenían buenas intenciones pero no mucho conocimiento del tema. La fuga de información, el desconocimiento (la ignorancia, la arrogancia a veces) coadyuvó a un momento en el que las decisiones se tomaban «entre gallos y media noche» [...] estaban más preocupados en un Estado que estuviera «limpio de todo mal», que en tratar de defender al cuerpo [policial] o al servicio [de inteligencia] [...] no es una buena estrategia liberarte de tu personal, sea bueno o sea malo, lo importante es defender la institución, evitar fugas de información, filtraciones [...] pero eso no lo entendieron en la reforma [...] los civiles por ingenuos, por no conocer de inteligencia, los de las Fuerzas Armadas por astutos, por defender amigos, intereses (Exmiembro del SIN 3).

Muchos no querían que personal clave se quedara después de la salida de Montesinos, era obvio que ese personal se convertiría en colaborador eficaz, testigo clave o algo que pudiera implicar al régimen en juicios o algo [...] era mejor sacarlos, despedirlos, desactivarlos para alejarlos del ojo de la tormenta (Miembro de la comisión de reforma de 2001).

Después de que Fujimori sacó a Montesinos, la gente del SIN todavía estaba ahí, toditos estaban... todo el 2000 se quedaron dentro del sistema de inteligencia y muchos ahí borrarón información, cambiaron datos, desconectaron informantes, cambiaron sus buzones de comunicación, se deshicieron de muchas cosas que no se conocen... apenas se sabe un poco de lo que ahí había (de lo que hay). Hay mucho trapo sucio por sacar y muchos cuerpos en el desván... [...] el 2001 también había gente del SIN de Montesinos... así llegaron los jefes que entraban y salían, los chismes adentro, era una olla de grillos... los jefes no sabían lo que hacían... sacaron a los analistas más importantes [...] por celos, por temor, por represalias, los sacaron [...] se quedaron sin gente. También se quedaron sin operativos, no había gente... luego, después, tuvieron que reclutar gente nueva... los bachilleres... y eso fue peor todavía (Exmiembro del SIN 11).

La salida del personal de inteligencia es una evidencia indiscutible. Este proceso puede dividirse heurísticamente (y para fines de este estudio) en tres periodos marcados por los gobiernos y jefaturas de inteligencia: i) el primer periodo está concentrado en un lapso de 58 días: los despidos y desactivaciones durante el tiempo entre el video del 14 de septiembre de 2000 y la salida de Fujimori del país el 13 de septiembre de ese año (fueron despidos, desactivaciones y traslados aún dirigidos por Fujimori y su cúpula). ii) El segundo periodo de alrededor de 11 meses, durante el gobierno de transición y una parte del gobierno de Toledo y que va desde febrero de 2001 con el nombramiento del primer jefe de inteligencia del Gobierno de Transición (Juan Manuel Campos Luque) y el fin de la jefatura de Panizo el 21 de enero de 2002 (nombrado por Paniagua y retirado por Toledo); iii) el tercer periodo dura aproximadamente 4 años y 11 meses: desde el 22 de enero de 2001 (con la jefatura de Juan Velit) y el fin del gobierno de Toledo en 2006 (cuando el jefe de inteligencia era Julio Raygada). Esta manera de dividir las etapas está dispuesta estrictamente en función de las etapas de despido y desactivación de personal de inteligencia (no de etapas políticas o de organización institucional).

¿Qué es lo que diferencia esos periodos respecto a los despidos y desactivaciones del personal de inteligencia? Por un lado, el primer periodo está marcado por los intereses del gobierno de Fujimori: evitar que los agentes y analistas se conviertan en colaboradores eficaces y en informantes del nuevo gobierno; por otro lado, el segundo periodo de despidos y desactivaciones está marcado por una tensión entre los intereses de los oficiales de las fuerzas armadas, políticos y agentes aún del gobierno de Fujimori y la inexperiencia de las personas que se encargaron de llevar a cabo la transición en el tema de inteligencia. El tercer periodo parece estar dispuesto por despidos y desactivaciones asociadas a la inestabilidad política e institucional del sistema de inteligencia y las tensiones entre sus varios jefes.

A un lado del SIN hay un descampado... ahí llevaron archivos, material, grabaciones... llamaron a los de la escuela (los graduaron en esos días... 150 se graduaron de Inteligencia del Ejército) [...] llevaron en varios turnos a la promoción para custodiar el material... llegaban camionetas con lunas polarizadas y se llevaban cajas... había custodia con armas largas, con agentes de civil... y luego hubo la incineración (Exmiembro del SIN 5).

En el año 2000, antes del video de Montesinos [con Kouri], llevaron a los alumnos de la Escuela de Inteligencia del Ejército y los pusieron en un ambiente del SIN para construir una pared [...] se agarraron el ambiente de «los ositos» [un grupo de miembros reclutados y entrenados por un Coronel que apodaban Osito]... poco después llamaron a los primeros puestos de la escuela para recoger equipos... eran los 10 primeros puestos del último año... sacaron cajas con 20 equipos [de interceptación] y ahí empezaron los entrenamientos... querían hacer un grupo especializado en la mejor tecnología de

intercepción. [...] Después del video los 20 equipos desaparecieron, desaparecieron todo, se lo llevaron ellos [...] no había registro de nada (Exmiembro del SIN 8).

Se dio paso al desmantelamiento y cuasi saqueo del SIN. Rozas firmó un dispositivo legal para justificar la incineración de abundante documentación clasificada sobre los planes y operativos realizados, con el fin de mantener a Fujimori en el poder. Aun en el cargo, el mandatario designó al coronel Luis Rodríguez Silva, exedecán suyo jefe de seguridad de Palacio, como jefe encargado del SIN. Rodríguez no solo ayudaría a Montesinos a fugarse, sino que dirigiría el traslado, ocultamiento, destrucción de equipos e información de la sede y archivos del SIN para sortear la inspección de la comisión desactivadora nombrada por el Congreso y presidida por Marcial Rubio, que ingresó a la sede de inteligencia acompañado de la prensa. Al interior del organismo, el personal militar y policial destacado retornó a sus institutos de origen, mientras los civiles —que eran alrededor de 350 [...]— se aferraron a sus puestos de trabajo tratando de marcar una distancia respecto de los militares (Carbajal, 2013, p. 53 citando a Bowen y Holligan, 2003, p. 296).

La culpa fue de todos, por ingenuos, por pendejos, por encubridores, todos tienen responsabilidad en lo que pasó [con el Servicio de Inteligencia] [...]. Primero Fujimori se llevó todo, después del discurso se llevó de todo, videos, documentos, dejó algunas cosas y eso es lo que se ha judicializado, lo que ha entrado en los libros del Congreso [se refiere a los 6 volúmenes de *En la Sala de la Corrupción* editada por el Fondo Editorial del Congreso], en los juicios [...] pero eso es solamente un poco de lo que había, cientos de videos [...]; también cuando se fugó Fujimori no te olvides que no se fue todo el SIN... Fujimori, sacaron gente al toque salió el video de Kouri, porque quería deshacerse de muchas pruebas seguro [...] pero después que se fue a Japón hubo todavía meses con los agentes de Montesinos en el SIN, gente que se llevó información, equipos, autos, casas [muchas estaban a sus nombres]... [...] y claro que luego la terminaron de malograr cuando empezaron a desfilan los jefes del CNI botando gente sin ningún criterio (Exmiembro del SIN 2).

Más allá de las razones y los responsables, el asunto concreto, evidente y registrable es que después de la desactivación del año 2000 hubo un periodo de crisis y ello implicó la salida de un número importante de agentes de campo, operativos y analistas, ¿cuántos?

2. SOBRE LA SALIDA DEL PERSONAL DE INTELIGENCIA DEL SERVICIO NACIONAL EN LA PRIMERA MITAD DE LA DÉCADA DE 2000

¿Cuántos miembros del servicio de inteligencia fueron desactivados, despedidos o desconectados del sistema en el año 2000 y en adelante? Al menos sobre los dos primeros periodos (entre la aparición del video Kouri-Montesinos y la salida de Panizo) hay muchas versiones de este número y evidentemente *no* hay un informe oficial que dé cuenta de este. Sin embargo, hay un rango

numérico que sugieren muchos de los informantes que vivieron ese periodo: *entre 800 y 1200 personas en total, entre analistas, agentes operativos, directores, coordinadores salieron completamente del Servicio* (sin contar los informantes, colaboradores y personal reasignado).

Si bien el rango dispuesto no es riguroso, no se trata de un dato arbitrario, y hay varios criterios para establecerlo. Una manera de dar con el número de personas que salieron del Servicio se explica por la cantidad de personal asociado al sistema de inteligencia durante el último año de la década de 1990 y la cantidad de personas que el sistema tuvo después de 2001. El resultante de esa resta nos deja un número relativo de personas que salieron de la red del Servicio entre el año 2000 y 2001. Así, la experiencia de los exagentes y de los jefes de inteligencia, y la literatura sobre el tema (aunque escasa), indican que el SIN de Montesinos llegó a tener entre 10 mil y 14 mil miembros *en total*.

Desde el SIN Montesinos realizó modificaciones muy importantes: en primer lugar, lo transforma de un pequeño organismo burocrático, en una inmensa organización que tuvo entre 1200 y 1500 empleados y agentes, con un presupuesto 50 o 60 veces más grande que en 1999 y que extendió su poder a unos 13,500 agentes de servicios de las fuerzas armadas y la policía (Basombrío y Rospigliosi, 2006, pp. 249-250).

Sin embargo, hay que tener claro que ese número incluye tanto el contingente de analistas del SIN y sus cuerpos operativos, como los agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía que fueran tomados por el SIN para diversas funciones; y además este número incluye la red de informantes y colaboradores del SIN. Por lo tanto, es necesario entonces hacer una partición del número indicado, para determinar cuántos eran personal operativo, analistas, colaboradores o informantes (para evitar una distorsión del número total inflado por el gran bloque de colaboradores e informantes incluidos en la cifra).

Entre el 92 y el 99 hubo entre 10 mil y 14 mil miembros del SIN en total [...] claro, eso si cuentas a todos y toda las redes, todos los grupos operativos, los grupos de tareas, las misiones, los informantes, todos. Entonces los miembros del SIN no son esos, sino 2500 aproximadamente, que eran el personal que se encontraba en planta en la sede de Chorrillos, y un número similar que posiblemente estaba destacado en otras partes del país o del extranjero, pero eso no lo sabemos con detalle (Exmiembro del SIN 14).

Del SIN como tal, eran como 2500 a 3 mil, además habían los que tenían destaques en provincias, los grupos en el extranjero, en misiones diplomáticas, otros cuyo número es incierto [...] pero algunos dicen que eso es como 2 mil o 3 mil más (Exmiembro del SIN 8).

Es que muchos leen en los que dice la prensa y es desinformación [...] hay los que dicen 10 o 12 mil, pero están mal... eso es contando todo lo que había en Chorrillos, pero también en las bases desconcentradas y con todo el país, los grupos operativos, las misiones, todo (Exmiembro del SIN 18).

Entonces tenemos: i) el rango que indica entre 10 mil y 14 mil personas que incluye todo el cuerpo de analistas, agentes operativos de todas las Fuerzas Armadas, Policía, civiles y los informantes y colaboradores, también a los cargos de dirección, servicios, administrativos, etcétera; ii) y el número concentrado de 2500 personas (incluidas en el número anterior) que eran los trabajadores de la sede central (que eran el cuerpo principal de directivos, analistas, contra-inteligencia y agentes operativos). Más allá de esta precisión, es evidente que el contingente numérico es considerablemente grande.

Ahora hay que descomponer ambos rangos. El primer número (entre 10 mil y 14 mil personas) requiere una descomposición para entender la división general del personal. Es claro que ese tamaño implicó un importante cuerpo de analistas (civiles y de las fuerzas armadas y policiales), pero también y en gran medida un gran cuerpo de operativos de campo entrenados durante la década de 1980 y 1990. Sin embargo, no se trata solo de estos actores: la estructura de red del sistema de inteligencia implicó además un contingente muy grande de colaboradores, informantes y de agentes reclutados y entrenados en terreno cuyo nexos con los cuerpos operativos se determinaba por los canales de comunicación interna o los buzones de contacto.

Así, se indica también que posteriormente a la desactivación el Servicio de Inteligencia se quedó con menos de quinientas personas en la sede central (2 mil personas si se incluyen las redes de informantes). Ello sugiere que alrededor de 8 mil y 12 mil personas dejaron de tener una relación directa con el Servicio. Pero este número incluye también a los *informantes* que fueron desconectados del servicio (o cuyos oficiales o agentes de enlace fueron separados y, por lo tanto, se perdieron las vías de comunicación) y que tenemos que excluir para determinar un número más preciso de analistas y agentes operativos. Un número grande de informantes y colaboradores —entre 6 mil y 7 mil— está incluido en este número y eso puede viciar el rango numérico que nos interesa.

Sobre esa resta se calcula que entre 2 mil y 5 mil analistas, agentes operativos, personal administrativo y otros trabajadores. Pero aquí se requiere una segunda precisión y exclusión de datos: los informantes de nuestro estudio coinciden en indicar que un grupo grande de individuos del rango numérico señalado (entre 1200 y 2700) regresaron a sus servicios de origen (Marina, Ejército, Fuerza Aérea, Policía) y no fueron desactivados, per se, del sistema. Por lo tanto, *eso deja un rango de entre 800 y 2300 analistas, operativos, administrativos y otras funciones que fueron desactivados, despedidos, cesados en total y tomando en cuenta todas las sedes y labores operativas en frente interno y externo, dentro y fuera del país.*

Ello coincide con el número de 2500 trabajadores de la sede central del SIN de Chorrillos, que incluía a cerca de 200 analistas, 1000 operativos y un grupo de cerca de 300 personas entre los puestos de dirección, coordinación, logística, administración, técnicos, etcétera (además de alrededor de 1000 personas ligadas a la seguridad de Montesinos); de los cuales quedaron muy pocos miembros tras la desactivación del SIN.

Con el cambio botaron a cerca de 1200 a 1400 personas en total contando la sede central y los contactos de cada uno de los grupos (Exmiembro del SIN 9).

Sacaron a mucha gente, cerca de 1500 personas que eran personal entrenado y calificado en labores de inteligencia estratégica, analísticas y agentes (Exmiembro del SIN 11).

Eso sugiere que alrededor de 1500 personas de la sede central y otras tantas de otras sedes y misiones específicas dejaron de tener una relación directa y servicios especializados con el SIN. Y de este número, entre 800 y 1200 personas cumplían labores de dirección, inteligencia estratégica, contrainteligencia, agentes operativos y analistas.

Otro conjunto de datos refuerza el rango numérico señalado: según informantes de este estudio que participaron en varias etapas del proceso de desactivación y reestructuración, y que han trabajado en el servicio de inteligencia entre finales de los años noventa y 2000, se muestra también cierta tendencia en los cálculos que corroboran el rango numérico planteado:

En los noventa había como 2500 miembros del servicio dentro de Chorrillos, personal de planta... alrededor de 1000 eran PNP para la seguridad de Montesinos, 800 de su seguridad personal (Exmiembro del SIN 12).

Había dos comedores, uno para 100 personas, y otro para 70 personas [en el SIN de Chorrillos]... en la época había tres turnos para tomar el rancho, 3 turnos para el desayuno, 3 turnos para el almuerzo y 3 turnos para la cena... o sea 170 por cada turno (en total 510 personas por desayuno, por almuerzo y por cena) lo que suma como 1500 personas en total adentro... además de los 1000 que eran la guardia de Montesinos. O sea como 2500 en total en la sede [de Chorrillos] (Exmiembro del SIN 20).

En total estamos hablando de una salida de más de 1500-2000 personas de la sede central... con la caída de Fujimori el servicio de inteligencia se quedó con menos de 500 personas de las que había tenido en Chorrillos [...] no sabría el número de los agentes en otras sedes de provincia o del extranjero por ejemplo (Exmiembro del SIN 2).

Otro conjunto de datos sugiere también que el rango numérico señalado tiene coherencia: después de 2001 hubo una política de reclutamiento de nuevos operativos, nuevos analistas, nuevo personal en el sistema. Ello se debió a que el propio servicio fue despojado de su personal y tenía que reconstruirse y dotarse de nueva gente (los puestos tardaron casi diez años en ser cubiertos,

de manera que recién a finales de la primera década del siglo XXI el reclutamiento se desacelera).

Hasta mediados del 2004 cerca de 600 personas estaban el Servicio, casi todos nuevos [...] de los que yo tengo datos certeros: 20-25 eran de la gestión de Campos Luque, 30 de Panizo; y también otros 60 de su segunda gestión... Rospigliosi trajo varios pero para la fecha ya había solo 40. Con Almeida fueron pocos porque no le dio tiempo: 10 son los que quedan. Los que más gente trajeron fueron Velit que trajo como 200 personas, Mora que llevó 120-140 personas y luego Raygada una cantidad similar. [...] pero claro, la gente entraba y salía, entraba, la botaban, botaban al jefe y el nuevo botaba a los anteriores, un mamarracho de contrataciones. [...] de todos esos los que quedaban de Montesinos eran 5 u 8 personas, nada más (Exmiembro del CNI 2).

Los botaron a todos, ¡a todos! Una de las cosas más cojudas que han podido hacer es eso... [exclamaciones] [...] De los de Montesinos no queda nada (salvo ahí unos 6 [personas] que no hacen nada). Todos los demás son nuevos (Exmiembro de DINI 1).

Desde inicios de la década había que reclutar gente, porque todos los que habían sido capacitados de la época de Montesinos ya no estaban. Eso es bien problemático porque había que reclutar y se reclutó pésimo [...] en total como 500 a 800 personas, pero no se puede ya comparar con la gente que había antes, los 2000-2500. Se ha perdido mucha gente valiosa en ese trámite (Exmiembro de DINI 3).

Los despidos-ceses-desconexiones-desactivaciones no se limitaron solo a los dos periodos iniciales (2000-2001), sino también se extendieron a la transición de Paniagua y al gobierno de Toledo. La inestabilidad del sistema y del liderazgo terminó de agrietar un terreno que ya estaba severamente debilitado:

Panizo orientó su gestión según el objetivo del nuevo gobierno: distanciarse radicalmente de todo aquello que recordara al SIN. En primer lugar, redujo el personal —sobre todo a militares en actividad— a 400 miembros, y nombró por primera a dos civiles en la dirección del frente interno y externo (*La República*, 2001, p. 11).

Panizo botó gente, pero ya habían dejado a los inservibles, a los que no manejaban información... la sacada de verdad la hicieron entre el gobierno del chino y el de la transición (Exmiembro del SIN 6).

Almeida reemplazó a Rospigliosi y, sin criterio definido, empezó a despedir personal del CNI, maltratando en el camino a los que echaba. La gente que llevó como reemplazo carecía de aptitudes y conocimientos. El resultado fue que al poco tiempo los despedidos empezaron a filtrar información sobre el CNI [...] a los medios de comunicación. [...] El almirante Panizo [...] siguió despidiendo personal y haciendo cambios y fue también atacado por los separados del servicio (Basombrío y Rospigliosi, 2006, pp. 271-272).

Los continuos cambios en la jefatura del CNI afectaron el proceso de reestructuración. La crisis organizacional en el CNI fue la extensión de la del SIN. Esto incluyó la continuidad de la incertidumbre entre el personal, siempre relacionada con la estabilidad laboral: «¡Ay! ¿Jefe nuevo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me sacarán? Te venían los nervios,

la preocupación [...]» La extensión de la incertidumbre se constituyó en un aspecto transmitido al nuevo personal del CNI, de modo que la percepción de inestabilidad laboral se mantuvo [...] (Carbajal, 2013, p.133).

Tu escuchabas hablar a la gente antigua, sobre todo los que habían quedado, que antes que nosotros entráramos hubo una poda gigante. Te daban a entender que eso no era seguro. Te hablaban de una poda y una decía Dios mío, ¿cuánto será la vida útil de uno aquí (entrevista 5) (Entrevista a miembro del CNI tomada de Carbajal, 2013, p. 134).

Rospigliosi metió gente, como cincuenta personas... varios periodistas... muchos de ellos pasaban información [a un canal]... otros son reporteros o pasaron información a reporteros [de varios canales] [...] igual no duraron mucho la mayoría (Exmiembro del SIN 7).

A mediados de septiembre del 2003 Toledo designó como sexto jefe al general en retiro Daniel Mora Zevallos, [...] se anunció su reestructuración [del CNI] en un plazo de 120 días, planteándose reducir el personal a un equipo mínimo de confianza. [...] Mora dispuso la captación de profesionales recién egresados de universidades... (Carbajal, 2013, p. 60).

Durante el 2004 hubo una consigna: botar a 2 o 3 personas semanales... Mora... para meter a gente de su confianza... y así lo hicieron. Botaron mucha gente... se quedaron en la calle (Exmiembro del SIN 8).

Ya para el 2006 había en total como 200 analistas y agentes, [además de] un número no determinado de alfas [agentes encubiertos del Ejército]... menos del 5% de esos eran del periodo de Fujimori (Exmiembro de DINI 3).

Incluso después del gobierno de transición de Paniagua los agentes siguieron saliendo del servicio, la ola de despidos y de reclutamientos continuó hasta la segunda mitad de la década de 2000. Es claro que este proceso trajo consigo varias consecuencias (incluso para la seguridad nacional), y es claro que se trata de una acción-reacción poco común en las lógicas regulares de los servicios de inteligencia (Cepik y Bruneau, 2008; Johnson, 2006; George y Kline, 2004; Sayle, 1986; Kent, 1986).

Por su parte, el general en retiro Daniel Mora opinó que fue una total exageración haber desactivado el SIN. Reconoció que si bien el SIN tuvo demasiado poder durante el gobierno de Fujimori, ello no justificaba su desactivación (Declaraciones a la Radio CPN de Lima del 8 de abril de 2002, citado en Maldonado Prieto, 2002).

[...] el CNI era un pesado aparato burocrático con más de 300 personas, la mitad de las cuales estaban destinadas a tareas administrativas. Una parte provenía todavía del antiguo SIN, y otra parte importante había entrado desde su creación por favoritismo político o personal. [...] el asunto es que no se podía despedir masivamente al personal incompetente y/o innecesario, tanto civiles como militares en retiro, porque eso daría lugar a fugas de información (como de hecho ocurrió) (Basombrío y Rospigliosi, 2006, p. 269).

¿Cuáles son los datos que interesan?: i) que el SIN fue desactivado y sometido a una reestructuración a partir del año 2000 y es una evidencia que hubo un contingente muy grande de su personal que fue cesado, despedido, no se renovaron contratos o fueron desconectados (analistas, operativos, informantes). ii) Que ese contingente representa un rango de entre 800 y 1200 individuos (directivos, analistas, técnicos especialistas y agentes operativos especializados) que se desvincularon del sistema o dejaron de trabajar directamente para el Servicio de Inteligencia Nacional. iii) Que esos 800 a 1200 individuos se fueron del Servicio con entrenamiento, formación, capacidad técnica y operativa, capacidad analítica y también con instrumentos operativos y tácticos para interceptaciones, seguimiento, infiltración, etcétera. iv) Evidentemente, esta gran cantidad de personal no dejó de trabajar en temas y lógicas asociadas a la dinámica de inteligencia operativa y analítica. Es claro que las personas que tienen trabajo operativo en ciertos temas (cualquiera que sea) adquieren un conocimiento y experiencia que constituye un capital relevante (Esteban, Jiménez y Librán, 2009; Ibáñez Gómez, 2009; Lippert y O'Connor, 2006) y que no se pierde ni diluye cuando cambian de empleo o de contratista. ¿A dónde fueron?

3. LA CRISIS DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA, ¿A DÓNDE SE FUE EL PERSONAL DESACTIVADO?

Se encontraron las cosas en estado lamentable... había en una esquina arrinconadas carretillas de heladeros, de panadero... eran de la época [de Fujimori y Montesinos]... para camuflaje [...] En el 2006 llegaron y picaron las paredes del ex SIN, para ver si había micrófonos, no se confiaba en lo que habían hecho en los años anteriores... y había la idea de que lo habían hecho todo muy mal (Exmiembro de DINI 2).

La situación del servicio de inteligencia durante la primera década del siglo XXI estuvo marcada por la crisis y el desorden institucional, pero también y de sobremanera por la renovación casi total del personal. Las consecuencias de la salida del personal fueron muchas: i) el servicio se quedó sin personas calificadas para las labores de inteligencia y se tuvo que reclutar a nuevas promociones cuyo rendimiento y calificaciones fueron, por lo menos, precarios; ii) la salida del personal implicó también la salida de tecnología y bienes muebles e inmuebles (algunos de estos estaban inscritos a nombre de los individuos del servicio, otros fueron sustraídos de las instalaciones del SIN); iii) el personal entrenado que salió del servicio se llevó su conocimiento y sus redes personales, contactos e informantes.

La grieta que la desactivación del servicio dejó, implicó un nuevo reclutamiento de personal (jóvenes bachilleres reclutados en las universidades públicas y privadas de Lima) que se convirtieron en analistas del servicio; personal de las fuerzas armadas y civiles que entraron en las escuelas de inteligencia. Muchos de ellos salieron del sistema poco tiempo después de entrar, y muchos de estos generaron filtraciones de información del servicio de inteligencia durante la primera década del siglo XXI.

Desgraciadamente debo confesar que el CNI estaba desmantelado. Actualmente no tiene instrumentos para trabajar. Principalmente carecemos de personal. Nuestros cuadros no están preparados todavía para asumir tareas delicadas. Preparar un cuadro de inteligencia es un proceso lento. Más o menos se calcula que se necesitan entre siete a diez años para adiestrarlo y ponerlo operativo (Velit, citado en Maldonado Prieto, 2002).

Uno de los problemas que derivó en sucesivos escándalos a lo largo de los años 2003 y 2004 y que tuvo como consecuencia continuos cambios de jefes del CNI es precisamente el de la filtración constante de información proveniente de esa institución, producto de un inadecuado manejo de la información y de la existencia de personal no calificado para tareas de inteligencia (Basombrío y Rospigliosi, 2006, p. 263).

Tampoco funciona el sistema en el segundo gobierno de Alan García. Los procesos de selección de personal para laborar en la DINI han sido por demás deficientes (a fines del 2006 contrataron 75 analistas y en junio del 2007 ya había despedido a 61, bien porque no rendían o bien porque no habían chequeado bien sus antecedentes, llevándose varias desagradables sorpresas) (Entrevista con exfuncionario de la DINI, tomada de Bolívar Ocampo, 2009, p. 271).

En el 2006 el personal de DINI era muy malo, no sabía nada de servicios de inteligencia... se reclutó gente que no sabía nada y los metieron de frente en el trabajo sin capacitación alguna... pasaron una semana, otros solamente un día... reclutaron muy mal... había gente que duró una semana, hubo gente que no aguantó el ritmo (Exmiembro de DINI 4).

La debilidad institucional del servicio de inteligencia se tradujo en operativos con impericia, filtraciones de información y maximizaron una situación de vulnerabilidad de la institución y de la información que se manejaba.

Al fin, la alta rotación en la planilla como en la jefatura derivó en inoperancia. Si un servicio de inteligencia es un organismo técnico, muy profesional y especializado, la salida de cuadros profesionales de analistas del CNI merma cualitativamente la producción de inteligencia estratégica. [...] con la consecuente inestabilidad del personal, pues cada jefe llevaba nueva gente y sacaba la del anterior (Obando, 2009, p. 53).

Al mismo tiempo de la crisis interna por la falta de personal, se inició un periodo de crecimiento y fortalecimiento de los servicios de inteligencia y los servicios de seguridad privada y empresarial. Muchos de los analistas,

operativos, oficiales que salieron del servicio, utilizaron el conocimiento e instrumentos adquiridos para montar nuevas empresas, otros fueron reclutados por empresas peruanas o internacionales que vieron en el éxodo del SIN y en la crisis de esa década, una situación beneficiosa para adquirir los servicios de un personal ya entrenado, ya capacitado y con mucha experiencia (y en algunos casos que tenían también instrumentos especializados).

El creciente mercado de la seguridad y la amplia demanda de servicios de seguridad-vigilancia-información especializada del siglo XXI generó también una amplia bolsa de trabajo para los agentes, analistas y operativos de campo (y sus equipos, redes y contactos) que habían sido despedidos, cesados o desactivados: la economía minera, la industria extractiva, la demanda empresarial y de las corporaciones privadas requieren tanto de servicios de seguridad como servicios de información, y ello sirvió como un campo central de demanda de estos servicios (eso sin contar el interesante negocio de la inteligencia privada para fines políticos, y para fines personales). Un escenario de una demanda creciente y un servicio rentable (más rentable que el propio servicio de inteligencia peruano).

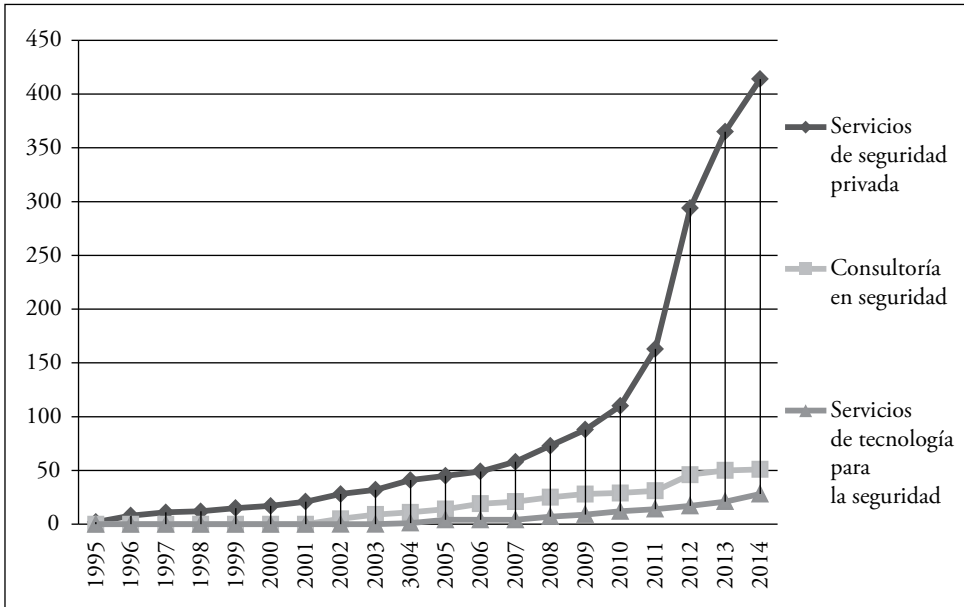
Casi todos los que trabajamos en la *fábrica* [Servicio de Inteligencia] nos sacaron, nos fuimos a las empresas privadas [...] Los oficiales pusieron sus empresas [...] marinos sobre todo, también del Ejército, de la Policía, y reclutaron del personal que estaba saliendo del SIN, del CNI, del servicio en general [...] y pusieron empresas de seguridad para las minas, para las empresas de petróleo, madera, también para empresas extranjeras —de Israel, de Estados Unidos, de Panamá— que hacían seguridad —inteligencia— empresarial. Y también cosas políticas (Exmiembro del SIN 16).

Yo mismo trabajé para mineras cuando salí del SIN, me llamaron y de ahí yo también llamé a los compañeros que se estaban quedando sin trabajo... había que sobrevivir y dar de comer a los hijos (Exmiembro del SIN 8).

Hay muchos casos de uso de equipos operativos de inteligencia privada, porque si no todos, muchos o la gran mayoría de los que trabajaban en el SIN se fueron para las minas, para las empresas privadas, que pagan mejor, tratan bien, y no fastidian. Ahí haces tu trabajo y ya (Exmiembro del SIN 12).

Las empresas privadas de seguridad (peruanas y extranjeras) fueron un espacio para recibir al personal desactivado, despedido, cesado del SIN, pero también un buen negocio para los oficiales que querían invertir sus ahorros o liquidaciones. Entre el año 2001 y el año 2013 hubo un incremento evidente de servicios de seguridad especializada y de empresas de seguridad especializada, empresas de servicios de información, y muchos de estos negocios tienen como dueños, gerentes, administradores y personal a exmiembros de las fuerzas armadas o policiales (algunos de estos, exoficiales, analistas o agentes de inteligencia).

Gráfico 1. Número de empresas de seguridad privada, consultoría para la seguridad y tecnología para la seguridad por año entre 1995-2014



Fuente: Sucamec. Elaboración propia.

Es claro que hubo un aumento considerable si se compara la cantidad de empresas que había en 1995 y aquellas que empiezan a abrirse durante el siglo XXI. Es claro también que este aumento no se debe y no implica solamente personal que salía de los servicios de inteligencia. Por un lado, se trata de un crecimiento explicable en relación a la demanda de servicios de seguridad privada en un contexto de alta percepción y prevalencia de inseguridad. Por otro lado, se trata de servicios requeridos por el desarrollo de las empresas privadas en el país (industria extractiva, sector energético, bancos, comercios, etcétera). Finalmente, se trata de un negocio que resulta atractivo para personal con entrenamiento de diferentes niveles (personal reclutado del servicio militar básico para labores de vigilancia, oficiales en retiro de las fuerzas armadas y policiales en trabajo de asesoría privada y asistencia técnica, personal de inteligencia para labores de análisis y de información, etcétera).

La seguridad privada ha crecido mucho en estos años [...] se debe también a que las empresas contratan servicios de seguridad para cumplir estándares de trabajo (seguridad minera por ejemplo). También es que hay muchos individuales civiles que piden servicios de seguridad, las municipalidades, gobiernos regionales, el propio Estado en general compra seguridad privada [...]. La gente del SIN, mucha se fue para las agencias

privadas, pero no es que han sido la causa del crecimiento... creo que hay una coincidencia y cuando la industria de la seguridad crecía, la gente del SIN, de CNI, de DINI salía y eso es como que el Estado peruano ha entrenado, invertido en capacitación para esa gente, les ha dado experiencia y las empresas han capitalizado eso (Funcionario de empresa privada de seguridad 4).

Al mismo tiempo, no se trata solamente de un campo para los desactivados, sino para el trabajo complementario de los que aún estaban de servicio y para otros miembros de las fuerzas armadas y policiales. Y al mismo tiempo, era evidente que se trataba de un negocio *in crescendo*: estudios de abogados, compañías mineras, empresas de comunicación, partidos políticos, empezaron a demandar estos servicios.

Los oficiales y suboficiales de DINTEMAR y de los otros cinco organismos [de inteligencia] se recurrían [...] proporcionando a empresas privadas información que es propiedad del Estado (Bolívar Ocampo, 2009, pp. 272-273).

Entre el 2000 y el 2006, la élite de chuponeadores y operativos de inteligencia electrónica de Montesinos mantuvo, desde algunas cómodas bases de apoyo empresariales y municipales —con la colaboración constante de oficiales en servicio activo, sobre todo en la Marina—, una exitosa compañía de espionaje electrónico con eventuales correlatos en medios (Gorriti, 2009, p. 125).

Se trataba de la aparición del fenómeno de la «inteligencia paralela», aquella que operaba de forma clandestina y posiblemente con equipos del SIN [...] en adición a lo encomendado al CNI se le encargó enfrentar a dicha inteligencia paralela (Carbajal, 2013, p. 57).

La bolsa de agentes y analistas de inteligencia generó un nuevo escenario en la oferta y venta de inteligencia y seguridad privada en el Perú. Así, durante los primeros diez años del siglo estos nuevos actores aparecieron con mucha fuerza y gran demanda por las empresas en competencia y por la necesidad de datos, información, para lograr licitaciones, para obtener información de la competencia, o para deshacerse de la competencia empresarial. En este campo lo más visible es la interceptación telefónica hecha a empresarios, a políticos, a tomadores de decisiones, que han sido divulgadas de manera sistemática durante este siglo. La lista de casos es inusualmente larga: cientos de audios y videos circulan el mercado de compra-venta de información. Aquí una lista de los casos de más impacto mediático que concentra, sobre todo, casos que implican interceptación de las comunicaciones de actores de la política local:

Tabla 2. Casos mediáticos de interceptaciones de las telecomunicaciones entre 2001 y 2014

Fecha	Caso	Tipo de operativo	Fuente
jun-01	La Comisión de Defensa del Congreso recibe el informe del procurador José Ugaz en el que se señala que hay 23 agraviados y 20 denunciados por los delitos de violación de las comunicaciones (entre ellos el presidente del Consejo de Ministros y canciller, Javier Pérez de Cuéllar, la congresista Anel Townsend y el legislador Javier Diez Canseco).	Interceptación telefónica	Diario <i>El Comercio</i> , lunes 15 de julio de 2013.
feb-01	La incautación de equipos de interceptación telefónica en los almacenes de Ramsa: Óscar López Meneses encubrió al prófugo exministro de Defensa Víctor Malca Villanueva, según conversaciones grabadas con su exesposa Maribel Malca.	Audios inéditos de conversaciones telefónicas registrados entre el 31 de diciembre de ese año y el 27 de enero de 2001.	Diario <i>El Comercio</i> , sábado 23 de noviembre de 2013.
ene-01	López Meneses mantiene conversación con excongresista tráfuga Jorge Polack sobre una maleta.	Audio grabado de conversación telefónica interceptada.	Diario <i>El Comercio</i> , sábado 23 de noviembre de 2013.
ene-01	López Meneses mantenía múltiples conversaciones de planeamiento político con excongresista Fernán Altuve Febres.	Audio grabado de conversación telefónica interceptada.	Diario <i>El Comercio</i> , sábado 23 de noviembre de 2013.
ene-02	Expresidente Alan García ratifica ante fiscal que fue «chuponeado» en una conversación con el congresista Jorge del Castillo.	Un programa de televisión exhibió la conversación interceptada.	Diario <i>La República</i> , miércoles 16 de enero de 2002.
jun-2002	Se establece que funcionarios de la empresa Telefónica del Perú habrían colaborado en la instalación de los 21 centros de escucha telefónica clandestina que la Dirección de Información Electrónica instaló. Se identificó a Nelson Alberto Tirado Ángeles, presunto trabajador de Telefónica, como el enlace entre esta compañía y los encargados de instalar los centros de escucha telefónica.	Investigación del fiscal Oscar Zevallos Palomino.	Diario <i>La República</i> , viernes 03 de mayo de 2002.
19/03/2003	Fiscalía investiga al presidente del Consejo Nacional de Inteligencia César Almeyda para esclarecer hallazgo de una camioneta de espionaje telefónico en una cochera alquilada por agentes de inteligencia.	Intervención de la Policía Anticorrupción al inmueble sospechoso.	Diario <i>La República</i> , miércoles 19 de marzo de 2003.

Fecha	Caso	Tipo de operativo	Fuente
28/04/2003	Difunden audio que registra la conversación telefónica entre el exministro y excongresista Jorge Mufarech y sus asesores.	Un programa de televisión exhibió la conversación interceptada.	Diario <i>La República</i> , lunes 28 de abril de 2003.
18/08/2003	El programa «En la boca del lobo» propala un diálogo telefónico del presidente Toledo con el jefe del Consejo Nacional de Descentralización Luis Thais.	Audio grabado de conversación telefónica interceptada.	Diario <i>El Comercio</i> , lunes 15 de julio de 2013.
17/12/2003	La periodista Rosa María Palacios denuncia la intervención telefónica en su contra.	Denuncia realizada por Rosa María Palacios.	Diario <i>La República</i> , miércoles 17 de diciembre de 2003.
17/11/2004	Exgerente de Radio Libertad acusa a Jorge Pólack de «chuponeo telefónico» desde la Radio.	Acusación de Luis Soriano ante fiscalía que fundamenta la acusación contra Polack por violación de las comunicaciones.	Diario <i>La República</i> , miércoles 17 de noviembre de 2004.
2006	Caso BTR: expresidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas contrató a empresa Business Track (BTR) para realizar «barridos electrónicos» en las oficinas presidenciales.	El portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas indica que Business Track S.A. figura como proveedor del Estado, contratado por el Congreso por S/. 3850 el año 2006.	Diario <i>La República</i> , martes 10 de febrero de 2009.
07/04/2008	Se denuncia la presunta intrusión al teléfono fijo del domicilio del editor central de Política y Opinión del diario <i>El Comercio</i> tras hallarse sofisticado aparato de escucha en poste a 400 metros de su domicilio.	La detección se logró por los habituales «barridos electrónicos» a los cuales el medio periodístico somete a las líneas de comunicación de sus empleados, como medida de precaución.	Diario <i>La República</i> , lunes 07 de abril de 2008.
05/10/2008	Fernando Rospigliosi presenta, en el programa «Cuarto Poder», cuatro audios en el que Alberto Quimper y Rómulo León Alegría negocian de manera irregular la adjudicación de cinco lotes petroleros a la empresa noruega Discover Petroleum. Caso «Business Track» (BTR) o también conocido como el escándalo de los «petroaudios» o «petrogate».	Audio grabado de conversación telefónica interceptada.	Diario <i>El Comercio</i> , lunes 15 de julio de 2013.

Fecha	Caso	Tipo de operativo	Fuente
23/01/2009	Caso BTR: Fiscalía revela los nombres de políticos chuponeados por Business Track. Las interceptaciones se dieron desde febrero de 2008. Entre los agraviados figuran el exministro Remigio Morales Bermúdez Pedraglio; el exministro Allan Wagner Tizón; el exministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz; el ex primer ministro Pedro Pablo Kuczynski; el embajador Javier Pérez de Cuéllar; entre otros.	Audio grabado de conversación telefónica interceptada.	Diario <i>El Comercio</i> , lunes 15 de julio de 2013.
06/08/2009	Caso BTR: se descubre una larga lista de audios interceptados en la residencia del embajador de Venezuela en Lima. Específicamente a Virly Torres, la exprimera secretaria y encargada de negocios de la delegación.	Audio grabado de conversación telefónica interceptada.	Revista <i>Caretas</i> , edición 2090, 06 de agosto de 2009.
24/06/2010	El Congreso presenta el Informe Final sobre el caso Business Track (caso BTR): agraviado en modalidad de espionaje el expresidente regional del Callao Rogelio Canches.	Audio grabado de conversación telefónica interceptada.	Diario <i>El Comercio</i> , lunes 15 de julio de 2013.
15/09/2010	Es revelado a través de la web Youtube un audio de la excandidata municipal Lourdes Flores Nano.	Audio grabado de conversación telefónica interceptada.	Diario <i>El Comercio</i> , miércoles 15 de setiembre de 2010.
16/09/2010	Periodista Jaime Bayly revela audios de la excandidata municipal Lourdes Flores Nano durante su campaña, conversando con el congresista de su partido Xavier Barrón.	Audio grabado de conversación telefónica interceptada.	Diario <i>El Comercio</i> , jueves 16 de setiembre de 2010.
19/11/2011	El congresista Omar Chehade es intervenido telefónicamente en una conversación luego de una reunión con tres generales de la PNP.	Audio grabado de conversación telefónica interceptada.	Diario <i>El Comercio</i> , lunes 15 de julio de 2013.
25/03/2012	El exfutbolista Roberto Martínez, en ese entonces funcionario de la Municipalidad del Callao, es filmado negociando la compra de equipos de interceptación telefónica. La acusación provino del exconvicto Wilbur Castillo.	Denuncia a través de filmación en video transmitido por el canal América Televisión.	Diario <i>La República</i> , miércoles 28 de marzo de 2012.
31/05/2012	El usuario 'Turbo Pascal' publicó en el Youtube unos audios sobre al caso Chavín de Huantar. La grabación contiene una conversación entre el expresidente del Poder Judicial César San Martín, Juan Jiménez Mayor, Pedro Cateriano, y la jueza Carmen Rojjasi.	Audio grabado de conversación interceptada.	Audio transmitido por Canal N, domingo 04 de agosto de 2013.

Fecha	Caso	Tipo de operativo	Fuente
08/06/2012	El programa «Tribuna Abierta» presenta audios que demuestran cómo se generó la iniciativa de la revocatoria contra Susana Villarán, quién pagó por la recolección de firmas y cómo se armó la lista al Congreso de Solidaridad Nacional. Los audios comprometen a Marco Tulio Gutiérrez, promotor de la revocatoria y personas del entorno de Luis Castañeda Lossio.	Audio grabado de conversación telefónica interceptada.	Diario <i>El Comercio</i> , lunes 15 de julio de 2013.
14/07/2013	Se difunde a través del programa de televisión «Panorama» un audio de interceptación telefónica al en ese entonces ministro de Defensa Pedro Cateriano.	Audio grabado de conversación telefónica interceptada.	Diario <i>El Comercio</i> , domingo 14 de julio de 2013.
28/05/2014	Fiscalía pide prisión preventiva al presidente regional de Áncash, César Álvarez, por el «caso centralita». César Álvarez y hasta un número de más de 50 posibles sospechosos de estar involucrados en el manejo y operación del recinto llamado «la centralita», desde donde presuntamente se «chuponeaba» a la oposición y se realizaban videos para la campaña de Álvarez.	Investigación judicial.	Diario <i>El Comercio</i> , miércoles 28 de mayo de 2014.

Fuente: Archivo de noticias. Elaboración propia.

¿Qué es lo que muestra esta situación? Un escenario particular que se generó, en parte por la demanda de los servicios de información-inteligencia y seguridad privada en un contexto de crecimiento económico (en gran medida proveniente de la industria extractiva y en una industria creciente de obras de infraestructura), y en un contexto particular en el que el personal del servicio de inteligencia se quedaba sin trabajo.

Este fenómeno, sin embargo, no es extraño (Crane, 2005; Dures, 2005; Vaitsman, 2001; Zarate, 1998) y muestra el éxodo recurrente del personal (militar y civil) entrenado para funciones operativas y analíticas, tanto en las Fuerzas Armadas y Policiales como en los servicios de inteligencia nacionales de varios países, hacia empresas privadas de seguridad, logística, información y de inteligencia empresarial. En el Perú la crisis trajo como consecuencia un nuevo y fortalecido rumbo para el desarrollo de la inteligencia privada y empresarial, y el debilitamiento del servicio de inteligencia nacional, cuya lenta recuperación aún no ha terminado. La corroboración de este fenómeno en el Perú y la evidencia de una precaria situación permiten establecer nuevas preguntas:

¿Cuál es la actual situación cuantitativa y cualitativa de los servicios privados de seguridad, de información y de tecnología? ¿Cuál es la situación de la recuperación institucional del servicio de inteligencia nacional? ¿Cuáles son los puntos vulnerables que son necesarios de estudiar? ¿Cuál es la regulación que se tiene y el control efectivo sobre la inteligencia privada? ¿Cuáles son sus límites operativos? ¿Cuáles son las consecuencias de este fenómeno?

4. CONSIDERACIONES FINALES

Primera. Hay mucha evidencia precedente para afirmar que el Servicio de Inteligencia Nacional atravesó un periodo de auge de presupuesto, personal, infraestructura y capacitación durante los años noventa. Que se trató de un fortalecimiento que, en muchas ocasiones, fue utilizado para fines privados, incluyendo la grabación de videos ilegales, la interceptación de las telecomunicaciones y operativos clandestinos organizados por la cúpula del gobierno de Fujimori. Lo que muestra la evidencia es que hubo un gran contingente de personal que fue entrenado y capacitado, que adquirió experiencia y pericia en diversas áreas del trabajo y del ciclo de inteligencia, un contingente de varios miles de personas entre directivos, analistas, agentes y colaboradores.

Segunda. La crisis política e institucional del Servicio de Inteligencia Nacional del año 2000, producto de la crisis de gobierno de Fujimori, generó un escenario de desorden que implicó al menos tres periodos: el primero de estos periodos estuvo coordinado por los actores del final del gobierno de Fujimori y es razonable pensar, de acuerdo a los testimonios, que hubo mucha información que se perdió, destruyó y ocultó en ese momento. Asimismo, este primer periodo implicó la desactivación de gran cantidad de informantes, colaboradores y el regreso de muchos agentes a sus servicios de origen (en las Fuerzas Armadas). Los periodos siguientes estuvieron marcados por el desorden institucional y la alta volatilidad de la dirección del Servicio de Inteligencia, por el desorden en la composición de la organización y por el despido del personal que aún trabajaba ahí. Ello terminó con una renovación casi total del personal de inteligencia, comparando aquellos que estaban a fines de los noventa y aquellos que quedaron a mediados de la década de 2000.

Tercera. La desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional y la crisis interna del sistema, generó un éxodo del personal, debido a los despidos generados por el propio gobierno de Fujimori, pero también por la precariedad de las conducciones del gobierno de transición de Paniagua y el gobierno de Toledo. Ello generó la salida de cientos de personas relacionadas al Servicio

de Inteligencia Nacional y al trabajo de inteligencia en el Perú. En este escenario es posible calcular un rango referencial y no riguroso de entre 800 y 1200 agentes operativos, contrainteligencia y analistas que fueron desactivados, cesados o despedidos.

Cuarta. Es evidente que la desactivación, cese y despido del personal trajo consecuencias. Por un lado, la ausencia de personal calificado en el SIN, CNI, DINI, etcétera, durante la primera década del siglo XXI. Por otro lado, la debilidad de la institución y la impericia del trabajo de análisis y del trabajo operativo. Asimismo, las fallas en la seguridad, la precariedad del personal nuevo y la alta volatilidad de este. Otras consecuencias se evidencian en las filtraciones de información a la prensa, venta de información y traslado de redes a otros contratistas. Asimismo, queda claro que el personal despedido, cesado o desactivado no dejó de hacer trabajo de inteligencia, pero cambiaron de contratista.

Quinta. Hay evidencia suficiente para mostrar que un grupo importante de agentes y analistas siguieron ejerciendo las actividades de inteligencia, pero esta vez en el sector privado. Este es un argumento razonable en relación al aumento constante de empresas de seguridad privada y de empresas de tecnología para la seguridad a partir de los primeros años del siglo XXI (al mismo tiempo que el despido y desactivación del SIN) y a los testimonios de diversos exagentes y analistas que dan cuenta de este fenómeno. En un contexto como ese es claro que se necesita ampliar el estudio sobre la situación del servicio de inteligencia y sobre las consecuencias del crecimiento de los servicios privados de inteligencia y seguridad en el Perú.

BIBLIOGRAFÍA

- Alegría, Ciro (2004). Inteligencia: el *ni contigo ni sin ti* de la democracia peruana. *Revista Quehacer*, 148, 12-20.
- Basombrio, Carlos y Fernando Rospigliosi (2006). *La seguridad y sus instituciones en el Perú a inicios del siglo XXI. Reformas democráticas o militarismo*. Lima: IEP.
- Bolívar Ocampo, Alberto (2009). Cultura, periodos culturales y servicios de inteligencia en el Perú 1960-2007. En Russel Swenson y Susana Lemozy (coords.), *Democratización de la función de inteligencia. El nexo de la cultura nacional y la inteligencia estratégica* (pp. 257-274). Washington: National Defense Intelligence College.
- Bowen, Sally y Jane Holigan (2003). *El espía imperfecto*. Lima: Peisa.
- Bures, Oldrich (2005). Private military companies: A second best peacekeeping option? *International Peacekeeping*, 12(4), 533-546.
- Carbajal, Ernesto (2013). *Inteligencia desbordada: cambios y continuidades en los intentos de reorganización de los servicios de inteligencia en el Perú*. Tesis para optar el título de licenciado en Sociología, Pontificia Universidad Católica del Perú.

- Caretas (2001). Entrevista al contralmirante Panizo. *Caretas* del 20 de diciembre de 2001. Recuperado el 1 de mayo de 2014 de <http://www.caretas.com.pe/2001/1701/articulos/panizo.phtml>
- Cepik, Marco y Thomas Bruneau (2008). Brazilian National Approach Towards Intelligence: Concept, Institutions and Contemporary Challenges. En Peter Gill, Stuart Farson, Mark Phythian y Shlomo Shpiro (eds.), *Handbook of Global Security and Intelligence: National Approaches, Volumen 1*. Washington: Praeger.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación CVR (2003). *Informe final. Tomo IX*. Lima: CVR.
- Crane, Andrew (2005). In the company of spies: When competitive intelligence gathering becomes industrial espionage. *Business Horizons*, 48, 233-240.
- Dirección Nacional de Inteligencia DINI (2014). Antecedentes de la DINI. Recuperado el 1 de mayo de 2014 de <http://www.dini.gob.pe/sina.html>
- Diario Expreso (2002). Desactivación de Inteligencia Naval permitió rebrote del terror. *Diario Expreso* del 14 de abril de 2000.
- Esteban, Miguel, Jesús Jiménez y Álvaro Librán (2009). Un nuevo modelo de negocio en España: servicios integrados de inteligencia, seguridad y logística para la acción internacional. *Inteligencia y Seguridad: Revista de análisis y prospectiva*, 6, junio-noviembre, 39-86.
- George, Roger y Robert Kline (2004). *Intelligence and the National Security Strategist: Enduring Issues and Challenges*. Washington: Sherman Kent Center, National War College, National Defense University Press.
- Gómez de la Torre Rotta, Andrés (2009). Servicios de inteligencia y democracia en América del Sur: ¿Hacia una segunda generación de reformas normativas? *Agenda Internacional*, XVI(27), 119-130.
- Gorriti, Gustavo (2009). *Petroaudios. Políticos, espías y periodistas detrás del escándalo*. Lima: Planeta.
- Ibañez Gomez, Fernando (2009). Empresas militares y de seguridad privadas: hacia una auténtica regulación. *Inteligencia y Seguridad: Revista de análisis y prospectiva*, 6, junio-noviembre, 123-144.
- Johnson, Loch (2006). *Strategic Intelligence*. 5 volúmenes. Washington: Praeger.
- Kent, Sherman (1986). *Inteligencia estratégica para pensar la política mundial norteamericana*. Buenos Aires: Pleamar.
- Lippert, Daniel y Daniel O'Connor (2006). Security Intelligence Networks and the Transformation of Contract Private Security Policing and Society. *International Journal of Research and Policy*, 16(1), 50-66.
- Maldonado Prieto, Carlos (2002). *Servicios de Inteligencia en Sudamérica. Estado de situación en una perspectiva comparada*. Georgia: Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (WHINSEC).
- Obando, Enrique (2009). La reestructuración de la inteligencia en el Perú: sus avances y sus problemas. En: *Inteligencia y seguridad: revista de análisis y prospectiva*, 5, 55-68.
- Sayle, Edward (1986). The Historical Underpinnings of the U.S: Intelligence Community. En: *International Journal of Intelligence and Counterintelligence*, 1(1), Spring.
- Vaitsman, Hélio Santiago (2001). *Inteligência empresarial: atacando e defendendo*. Rio de Janeiro: Interciência.
- Zarate, Juan Carlos (1998). Emergence of a New Dog of War: Private International Security Companies, International Law, and the New World Disorder. *Int'l L.*, 75, 94-97.